

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

29ª REUNIÓN — 8ª SESIÓN EXTRAORDINARIA — 24 DE MARZO DE 1988

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor VÍCTOR HIPÓLITO MARTÍNEZ

y del señor presidente de la Comisión de Legislación General,
doctor ALBERTO J. RODRÍGUEZ SAA

Secretarios: doctores ANTONIO J. MACRIS y LEONARDO JUSTO PALOMEQUE

Prosecretarios: doctor ALBERTO J. B. IRIBARNE y señor DESIDERIO LAUREANO ALMIRÓN

SENADORES PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Ramón
AMOEDO, Julio A.
BENÍTEZ, Alfredo L.
BERHONGARAY, Antonio T.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO, Leopoldo
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CONCHEZ, Pedro A.
DE LA RÚA, Fernando
DEL VILLAR, Manuel
FALSONE, José A.
GENOUD, José
GIL, Francisco
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo L.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
MARTIARENA, José H.
MAUJUM, Fernando H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MOLINA, Pedro E.
MURGUIA, Edgardo P. V.
NÁPOLI, Antonio O.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
RIVAS, Otilia del Valle

RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.
ROMERO, Juan Carlos
ROMERO FERIS, José A.
SAADI, Ramón Eduardo
SÁNCHEZ, Libardo N.
SAPAG, Elías
TENEV, Carlos

AUSENTES, EN COMISION:

GASS, Adolfo
GROSSO, Edgardo Roger M.
MALHARRO de TORRES, Margarita
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
TRILLA, Juan
VIDAL, Manuel D.

AUSENTES, CON AVISO:

GURDULICH de CORREA, Lilianna I.
JUAREZ, Carlos Arturo
LEÓN, Luis A.
MENEM, Eduardo
RUBEO, Luis
SALIM, Luis
SOLANA, Jorge D.
VELAZQUEZ, Héctor J.

5. **Moción de preferencia** formulada por el señor senador Berhongaray para considerar en la sesión del miércoles 6 de abril el proyecto de ley de defensa nacional. (C.D.-105-74/87.) Se aprueba. (Página 2846.)
6. **A moción del señor senador Amoedo** se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones, el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicitan informes acerca de la postura argentina respecto de la investigación de los derechos humanos en Cuba. (S.-105-504/88.) (Pág. 2848.)
7. **Moción de preferencia** formulada por el señor senador Bravo Herrera para tratar en la próxima sesión, con despacho de comisión o sin él, los proyectos de comunicación de que es autor sobre adopción de medidas diplomáticas ante Irán e Irak con el objeto de que acaten la resolución 598 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sobre restitución de documentación histórica a la provincia de Salta. (S.-105-436/87 y 457/87.) Se aprueba. (Pág. 2851.)
8. **A moción del señor senador Rodríguez Saá** se resuelve postergar, sin fecha precisa, la preferencia fijada para el tratamiento de los proyectos de ley de obras sociales y de seguro nacional de salud. (C.D.-105-50 y 58/87.) Se aprueba. (Pág. 2851.)
9. **Moción de sobre tablas** formulada por el señor senador Britos para tratar el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita el aumento del monto de las jubilaciones y pensiones del régimen nacional. (S.-105-557/88.) Se rechaza. (Página 2855.)
10. **A pedido del señor senador Murguía** se resuelve recomendar pronto despacho a la Comisión de Familia y Minoridad para el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicitan informes sobre la actividad de la Secretaría de Minoridad y Familia, relacionada con el alojamiento de menores en diversos establecimientos. (S.-105-568/88.) (Pág. 2855.)
11. **A moción del señor senador Aguirre Lanari** se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de resolución del que es autor, por la Cámara constituida en comisión, junto con el señor senador Romero Feris por el que se adhiere a los actos conmemorativos del cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Corrientes, con la colocación de una placa en el lugar que recuerda dicho acontecimiento. (S.-105-569/88.) (Pág. 2855.)
12. **A pedido del señor senador Nápoli** se resuelve recomendar pronto despacho a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto para el proyecto de declaración del que es autor junto con el señor senador Gass por el que se manifiesta preocupación por el envío de tropas de los Estados Unidos a la zona fronteriza de las repúblicas de Honduras y Nicaragua. (S.-105-570/88.) (Pág. 2863.)

13. **A pedido del señor senador Martiarena** se resuelve reiterar al Poder Ejecutivo la comunicación del Honorable Senado, por la que se le requiriera la inmediata aplicación de la ley 23.302 (régimen de protección al aborigen). (Pág. 2863.)

14. **Asunto entrado:**

LX. Proyecto de comunicación del señor senador Murguía por el que se solicita una amplia acción propagandística de las posiciones argentinas sobre las islas Malvinas. (S.-105-588/88.) (Pág. 2863.)

15. **A pedido del señor senador Murguía** se resuelve recomendar pronto despacho a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto para el proyecto de comunicación ingresado en el punto anterior de este sumario. (Pág. 2864.)

16. **Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social** en el proyecto de ley en revisión por el que se establece la prórroga de beneficios previsionales a derechohabientes de personas desaparecidas. (C.D.-105-76/88.) Se aprueba. (Pág. 2864.)

17. **Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías** en el proyecto de ley del señor senador de la Rúa por el que se prohíbe y sanciona todo tipo de acto discriminatorio. (S.-105-452/87.) (Página 2870.)

18. **Apéndice:**

Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 2890.)

—En Buenos Aires, a las 18 y 7 del jueves 24 de marzo de 1988:

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — Invito al señor senador por Corrientes, don Juan R. Aguirre Lanari, a izar la bandera en el mástil del recinto.

—Puestos de pie todos los presentes, el señor senador Juan R. Aguirre Lanari procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

JURAMENTO E INCORPORACION DE UN SEÑOR SENADOR ELECTO

Sr. Britos. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Presidente. — Así se hará, señor senador.

- Se llama para votar.
- Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. — Se va a votar.

- La votación resulta afirmativa.
- En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

17

PROHIBICION Y SANCION DE ACTOS DISCRIMINATORIOS

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías en el proyecto de ley del señor senador de la Rúa sobre prohibición y sanción de actos discriminatorios.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee):

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos y Garantías han considerado el proyecto de ley del senador Fernando de la Rúa sobre prohibición y sanción de actos discriminatorios (S.-105-452/87); y, por las razones que dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.

De acuerdo al artículo 102 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al Orden del Día.

Sala de las comisiones, 9 de marzo de 1988.

Fernando de la Rúa. — José A. Falsonc. — Alfredo L. Benítez. — Héctor J. Velázquez. — Adolfo Gass. — Margarita Malharro de Torres. — Luis A. J. Brasesco. — Fernando H. Maulhum. — Arturo I. Jiménez Montilla. — Eduardo Menem. — Juan R. Aguirre Lanari. — Jorge D. Solaná.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Agrégase a continuación del artículo 1.071 bis del Código Civil el siguiente:

Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.

A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, sexo, posición económica, condición social o pertenencia a una

Art. 2º — Sustitúyese el inciso 4º del artículo 80 del Código Penal por el siguiente:

4º Por placer, codicia, persecución u odio hacia una raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Art. 3º — Agrégase como segunda parte del artículo 95 del Código Penal, lo siguiente:

Cuando la riña fuese motivada por persecución u odio hacia una raza, religión, nacionalidad o ideas políticas se aplicará reclusión o prisión de tres a ocho años en caso de muerte y de uno a seis en caso de lesión.

Art. 4º — Sustitúyese el inciso 1º del artículo 142 del Código Penal por el siguiente:

1º Si el hecho se cometiere con violencia o amenazas o con fines de persecución u odio hacia una raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Art. 5º — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 149 bis del Código Penal por el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. La pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas, si las amenazas fueran anónimas o si se motivaren por persecución u odio hacia una raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Art. 6º — Sustitúyese el inciso 1º del artículo 149 ter del Código Penal por el siguiente:

1º De tres a seis años de prisión o reclusión en los siguientes casos:

- a) Si se emplearen armas o si las amenazas fueran anónimas;
- b) Si las amenazas se profirieron por persecución u odio hacia una raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Art. 7º — Incorpórase como inciso 6º del artículo 184 del Código Penal el siguiente:

6º Cuando el hecho fuese cometido por persecución u odio hacia una raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Art. 8º — Agrégase como último párrafo del artículo 186 del Código Penal lo siguiente:

Cuando el incendio se cometiere motivado por persecución u odio hacia una raza, religión, nacionalidad o ideas políticas las penas se elevarán en un cuarto.

Art. 9º — Incorpórase como artículo 213 ter del Código Penal el siguiente:

Artículo 213 ter. — Será reprimido con prisión de un mes a tres años el que participare en una organización o realizare propaganda basadas en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o re-

ligiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaran a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Art. 10. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fernando de la Rúa.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La Constitución Nacional, plasmando numerosos antecedentes de nuestro derecho patrio, consagró la igualdad de todos los habitantes ante la ley y desterró toda forma de privilegios de sangre y nacimiento. Los derechos y garantías proclamados en la Ley Suprema se reconocen "a todos los habitantes de la Nación". Hacer efectiva su vigencia para todos es una misión fundamental de los gobernantes y una responsabilidad de la comunidad toda.

La República Argentina no ha sufrido enfrentamientos raciales o religiosos ni ha visto minorías étnicas o de cualquier otro tipo oprimir a vastos sectores de la población, ni existen tampoco en la inmensa mayoría de los argentinos sentimientos de menosprecio hacia otros seres humanos por su sexo, color, raza, fe religiosa o ideología. Si anidan esporádicos brotes de intolerancia, no son más que expresiones marginales ajenas a la idiosincrasia de un pueblo cuya conformación misma es un crisol de razas y culturas.

Nuestro país se ha unido a la comunidad internacional para afirmar "la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres" lo cual no admite "distinción de raza, de sexo, de lengua o de religión". (Carta de la ONU, artículo 1).

Por ley 17.722 se aprobó la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, y ya durante el actual período constitucional, el Pacto de San José de Costa Rica y los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU.

De esta forma, la Argentina ha integrado a su derecho positivo los convenios y tratados internacionales, que demuestran al mundo que el respeto a los derechos humanos no es meramente una cuestión interna de cada Estado sino algo que interesa a la comunidad internacional. Juan Pablo II, en su primera encíclica escribió: "En definitiva, la paz se reduce al respeto de los derechos inviolables del hombre —*opus iustitiae pax*— mientras que la guerra nace de la violación de estos derechos y lleva consigo aún más grandes violaciones de los mismos".

El Poder Ejecutivo con fecha 5 de septiembre de 1984, remitió a la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre Prohibición y Sanción de Actos Discriminatorios, que obtuvo, con importantes modificaciones, sanción de esa Cámara en la sesión del 26 de junio de 1985.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de este Honorable Senado estudió detenida y cuidadosamente la sanción de la H.C.D. Encontró en ella muchos errores técnicos y de formulación y varias contradicciones porque por vía de excepción se permitía la discriminación

que justamente trataba de proscribir. Era así inviable para la realidad de nuestro país, aunque algunas de sus soluciones pudieran tenerse en cuenta. Una reformulación era necesaria pero no se pudo elaborar un texto adecuado. El proyecto, por ese motivo, quedó pendiente.

Buscamos la opinión de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y realizamos numerosas consultas a personas y entidades. Ello me ratificó en la conclusión de que es necesario reformular el tema, dando lugar así a un nuevo proyecto.

A la detallada enumeración de hechos y circunstancias, que llevaban a resultados paradójicos y contradictorios, he preferido seguir el criterio ya contemplado al tutelarse el derecho a la intimidad (artículo 1.071 bis del Código Civil). La discriminación constituirá un ilícito civil, y como tal da lugar a una acción del damnificado para obtener su cese y la reparación moral y material que se hayan ocasionado.

No hemos querido hacer un enunciado taxativo de motivos de discriminación, sino que creemos preferible dar al juez las pautas para determinar si además de la raza, la religión, nacionalidad, ideología, opinión política, sexo, posición económica, condición social o condiciones físicas se pueden producir otras formas de discriminación igualmente susceptibles de sanción.

Podría decirse que la idea fuerza de la norma es asegurar a todos los habitantes de la Nación el efectivo goce de su igualdad ante la ley. Para comprender su alcance contamos con la constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha definido la igualdad en fallos 199: 268; 246: 350; 246: 70 entre muchos otros. La Honorable Cámara de Diputados recogió esa jurisprudencia en la redacción del artículo 1º del proyecto a que nos hemos referido, criterio del que se aparta el que ahora presento, porque esos principios no requieren ser expresados en la norma positiva ya que están vigentes en la práctica judicial.

Complementando la normativa civil, se incorporan las causales de discriminación más frecuentes como agravantes en la comisión de diversas figuras delictivas. El criterio ha sido aquí el odio y la persecución por razones raciales, ideológicas o religiosas como elementos del tipo penal.

La opinión pública se ha visto sorprendida recientemente por episodios que han exteriorizado o pretendido exacerbar esta clase tan condenable de conductas humanas, por lo que en el proyectado artículo 213 ter se lo sanciona severamente, ya que puede considerarse la base ideológica de la comisión de delitos más rigurosamente penados.

Podemos sintetizar la técnica empleada con las palabras de Sebastián Soler en la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados en 1963: "En consecuencia, el sistema propiciado por mi proyecto —en el cual no ratifico— es el de que las figuras tradicionales que pueden ser cometidas por odio racial o religioso reciben, por esa vía, una agravación". (ADLA, 1964-C.-2103).

La sola creación de normas jurídicas, así como el agravamiento de penas o la tipificación de determinadas conductas como delitos no bastan para desterrar los males que de esta forma intentamos combatir. No bas-

tan, porque las normas no tienen un efecto instantáneamente transformador de la sociedad, sino que ciertas actitudes, reacciones instintivas, prejuicios y sentimientos disvaliosos, sólo desaparecen en la medida en que son eliminados del interior de los hombres, a través de una tarea pedagógica que necesita de la familia, la escuela, los medios de comunicación, las confesiones religiosas, los partidos políticos y las entidades intermedias así como del aporte de cada hombre, mujer, joven o niño. En ese sentido, las leyes, aunque dirigen por sí solas todas las conductas, tienen una fuerza formadora de mentalidades y conciencias al sancionar los comportamientos que la moral repudia.

Es evidente que en este final del siglo XX siguen necesitándose gestos ejemplares de tolerancia y respeto, que sean capaces de superar incluso siglos de desconocimiento o desconfianza. Por eso es que el mundo se conmovió cuando el papa Juan Pablo II visitó la sinagoga de Roma y puso allí de manifiesto la riqueza de un patrimonio común.

A la vez, la humanidad no deja aún hoy de avergonzarse y horrorizarse ante el holocausto que provocó, hace apenas medio siglo, el odio irracional y patológico de esa tremenda fuerza del mal que fue el nazismo.

Al presentar este proyecto a consideración de vuestra honorabilidad tomo en cuenta, además, la inquietud expresada por dirigentes de la colectividad judía en fecha reciente, de contar con una ley antidiscriminatoria, que refleje la indignación de la comunidad nacional frente a cualquier atisbo de odio o persecución racial o religiosa o de cualquier otro tipo.

En definitiva, es el pueblo argentino el que, reafirmando los valores que la Constitución Nacional consagra y fiel a su fe en Dios, que creó a los hombres iguales en dignidad, está dispuesto a luchar con todos los hombres y mujeres de buena voluntad para construir un mundo en que todos se reconozcan hermanos.

Fernando de la Rúa.

Sr. Presidente. — En consideración en general. Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: vengo a informar el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley que oportunamente presentara proscribiendo y sancionando los actos de discriminación por causas raciales, religiosas u otros motivos.

Me complace en señalar la presencia en este recinto de representantes de la DAIA y de otras organizaciones defensoras de esta causa, que han apoyado esta iniciativa.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Legislación General, senador Alberto J. Rodríguez Saá.

Sr. Martiarena. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. de la Rúa. — Cómo no, señor senador.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: en la reunión de presidentes de bloque celebrada ayer — quiero aclarar una cuestión porque en el Congreso de la Nación Argentina

el acta se dice: "Tratamiento del Orden del Día N° 259" — anticipé que iba a formular una observación al tratamiento de este proyecto.

Le ruego al señor senador de la Rúa que me permita explicar la motivación que tengo para observar la consideración de este proyecto — no su texto — antes de que él avance en su informe, porque deseo plantearlo como una cuestión previa.

Estimo que este proyecto no puede ser considerado en esta oportunidad. Estoy totalmente de acuerdo con su propósito, los fundamentos y la orientación, aunque discrepo con algunas de las expresiones contenidas en su texto, que serían motivo de la discusión en particular. Mi planteo se refiere nuevamente a lo que estimo debe ser el cumplimiento estricto del trámite fijado para el tratamiento de los proyectos durante el período extraordinario de sesiones.

Esta iniciativa nace con un proyecto del Poder Ejecutivo — mensaje 2.779 del 5 de septiembre de 1984 — que tuvo entrada en la Cámara de Diputados. Sigue su trámite parlamentario y toma estado de tratamiento en la sesión del 12 y 13 de septiembre de 1984. Efectivamente, se trató en la sesión del 26 y 27 de junio del año siguiente y la Cámara de Diputados lo sancionó el 27 de junio de 1985. Ingresó a este Senado el 10 de julio de 1985 y fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Derechos y Garantías, donde transcurrido el tiempo, caducó en virtud de lo dispuesto por la norma que fija el tiempo de vigencia de los proyectos en comisión.

En el ínterin, el señor diputado Lorenzo Cortese presenta en su Cámara un proyecto de ley con un texto similar al del Poder Ejecutivo, que tramita por expediente 445-D. del '87.

Luego viene nuevamente la convocatoria a sesiones extraordinarias, y el Poder Ejecutivo, por decreto 1.879 del 24 de noviembre de 1987, punto 7, se refiere a las "distintas formas de discriminación", del expediente 445-D. del '87. Es decir que el Poder Ejecutivo hace expresa referencia en el decreto de ampliación de convocatoria al expediente a que se refiere el proyecto del señor diputado Lorenzo Cortese: expediente 445-D. del '87.

El proyecto presentado por el señor senador de la Rúa el 22 de diciembre de 1987 tiene dictamen de comisión, que es el que tendríamos que tratar en esta oportunidad. Pero considero que si el Poder Ejecutivo no se limita a indicar el tema para tratar en sesiones extraordinarias sino que expresamente se refiere al expediente 445-D. del '87, proyecto del señor diputado Cor-

tese, determina con precisión cuál es la Cámara iniciadora y cuál el proyecto que debe tratarse.

Reitero que en general los proyectos son bastante similares y que las diferencias que pueden existir no hacen al fondo ni al sentido ni a la orientación de la legislación que quiere dictarse. Pero supongo que si nosotros aprobamos ahora el proyecto presentado por el señor senador de la Rúa, va a ocurrir que al tratar este proyecto Diputados hará valer esta forma de expresar la convocatoria a extraordinarias para este tema, con lo cual nos trenzaríamos con la Cámara de Diputados en una discusión que puede frustrar, o por lo menos demorar, el anhelo que todos tenemos de que esta ley se sancione al fin.

Es un viejo anhelo que además recoge, como se dirá oportunamente, iniciativas que están consagradas en convenios internacionales, y un espíritu nacional que es unánime en el sentido de impedir los actos de discriminación por razones de raza, idioma, sexo, opiniones políticas o gremiales, etcétera.

De manera que mi planteo es que este asunto está para ser tratado en el Parlamento de acuerdo con el expediente 445/87. Si el Poder Ejecutivo no dijera esto de una manera tan expresa nosotros podríamos interpretar, como se interpretó en el caso de la ley de protección a los aborígenes que la simple referencia no obstaba a la caducidad. Pero estimo que aquí la cuestión es distinta, y temo que las modificaciones que el proyecto del señor senador de la Rúa introduce en el texto lo hacen diferente en muchas partes del proyecto del señor diputado Cortese, que es el que el Poder Ejecutivo ha querido que trate el Parlamento. Y esto va a motivar desencuentros entre las ramas del Parlamento y demoras que no creo que debamos provocar de ningún modo por una cuestión que parece tal vez anodina y circunstancial, pero que nos coloca en un enfrentamiento con lo que ha expresado el Poder Ejecutivo.

Aunque no soy correligionario del señor diputado Cortese he leído su proyecto y lo he comparado con el del señor senador de la Rúa. Advierto en consecuencia que esta referencia precisa al expediente en el que figura el proyecto del señor diputado Cortese está indicando el propósito del Poder Ejecutivo. Más aún, hago notar que al publicarse el Trámite Parlamentario N° 154 de la Cámara de Diputados, que da cuenta del temario de convocatoria a sesiones extraordinarias, se hace mención en el punto 4º de un proyecto de ley sobre modificación del Código Penal en cuanto a la nulidad de las discriminaciones relativas a personas, ra-

zas, religión o creencias, sexo y cuestiones conexas, "expediente 445/87".

Esta es la cuestión previa que quería dejar expresada, porque no me gustaría que incurriéramos en un error de trámite parlamentario que, en lugar de permitirnos contar con una ley rápidamente, nos lleve a un cuestionamiento entre Cámaras.

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — Continúa en el uso de la palabra el señor miembro informante.

Sr. de la Rúa. — Creo que debemos entender lo dicho por el señor senador Martiarena como una moción para resolver una cuestión de trámite.

Voy a contestar. No coincido con el planteo del señor senador. Siempre aparece algún obstáculo formal que impide o demora el tratamiento de las leyes fundamentales. Sé de la seriedad con que formula sus observaciones, pero en este caso, a diferencia de otros en que hemos coincidido, no veo sus razones.

La Constitución dice que el Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias cuando algún asunto de orden o interés público lo requiera. De aquí deriva que el Poder Ejecutivo puede enunciar los asuntos de grave orden o interés público que habilitan la potestad del Congreso durante las sesiones extraordinarias para tratar los temas incluidos en la convocatoria. Pero lo que de ningún modo puede suponerse es que la facultad del Poder Ejecutivo abarque el variar el orden de iniciativa de las Cámaras, pasando la posibilidad de iniciar el tratamiento de un proyecto exclusivamente a una Cámara en detrimento de la otra, porque es todo el Congreso el que está convocado. En este caso, el enunciado del Poder Ejecutivo se refiere al tema de la discriminación y, cuando menciona un expediente en relación al trámite, correspondiente a un proyecto, no lo hace sino para una individualización mayor de la cuestión de discriminación a que se refiere: el problema de la ley de discriminación racial y religiosa. Es el Congreso el que queda habilitado y no la Cámara de Diputados.

El diputado Cortese ha hecho un trabajo excelente y estuvo esperando aquí horas para asistir a la iniciación del tratamiento de este tema, con la expectativa de que después pudiera proseguir en la Cámara de Diputados para que el proyecto de ley sea sancionado de una vez.

Existiendo la inclusión del tema en sesiones extraordinarias, el Congreso queda habilitado y cualquiera de las dos Cámaras puede tomar la iniciativa. Es un error suponer que cuando se incluye un tema en sesiones extraordinarias sólo pueden tratarse los proyectos del Poder Ejecuti-

vo o los que el Ejecutivo indique. Porque, si no, el Congreso estaría cercenado en sus facultades y tendría una potestad legislativa a medias, condicionada o dirigida a la inclusión o exclusión de temas y al envío o no de un proyecto del Poder Ejecutivo, o a esta hipótesis peor que planteó el señor senador por Jujuy de que indique un proyecto determinado como para que nadie hable más en el Congreso y se limite exclusivamente al tratamiento de un texto predeterminado.

Por eso no tiene razón el señor senador Martiarena y creo que debemos continuar con el tratamiento de este importante asunto, que se inicia en 1984 cuando el Poder Ejecutivo manda un primer proyecto a la Cámara de Diputados, que lo estudia largamente, durante varios meses en comisión. Luego sanciona un texto con la disidencia del diputado Cortese, que propone algo más razonable, mejor estructurado. Luego, en el debate, se hacen agregados que alteran no sólo la técnica sino, casi —diría—, el espíritu de la ley porque, mientras por un lado se sanciona la discriminación, por otro se la justifica.

Y así ingresa en la Cámara de Senadores, en donde no pudimos encontrar una formulación jurídica adecuada, y caducó ese proyecto. Ahora elaboramos este otro texto, para el que tuvimos en cuenta el proyecto del diputado Cortese, el debate de gran valor jurídico y filosófico en la Cámara de Diputados, el proyecto del Poder Ejecutivo, el proyecto de Código Penal del senador Jiménez Montilla, en donde también están contenidas normas que prevén la sanción de los actos cometidos por odio o persecución racial y religiosa.

Hemos repasado los antecedentes de la ley 16.678 de 1964, inspirada por el gran jurista cordobés Ricardo Núñez, en donde se incluye la sanción para delitos motivados por cuestiones raciales y religiosas. También se tuvo en cuenta el informe del doctor Soler en 1963 ante el Congreso cuando explicó el agravamiento de la pena para ciertos delitos por cuestiones raciales y religiosas.

Trabajamos teniendo en cuenta lo bueno, desechando lo malo y resolviendo cuestiones opinables, como la inclusión de la agravante de pena para el delito de homicidio y lesiones en ríñon, cuando ésta tiene su origen en la agresión por motivos raciales o religiosos, circunstancia que el proyecto de Cortese no incluye.

La primera figura reforma el artículo 1.071 bis del Código Civil en donde, a continuación del derecho a la intimidad, se agrega otra figura que permite la defensa privada ante los tribunales de la igualdad ante la ley, cuando por motivos arbitrarios y discriminatorios se priva a una

persona de los derechos fundamentales que la Constitución le acuerda, especialmente cuando se debe a razones de raza, religión, sexo, condición económica, caracteres físicos, etcétera.

De modo que es una manera de avanzar en esta importante cuestión de la discriminación, que es el tema incluido por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias. Y sinceramente, señor senador, me sentiría menoscabado —y creo que también debería sentirse así el Senado— si aceptáramos que la facultad del Poder Ejecutivo llega hasta decir que sólo una Cámara puede ocuparse de un tema y la otra debe quedar como espectador pasivo de la dirección que el Poder Ejecutivo quiera darle. No es lo que ha querido hacer en este caso, sino individualizar mejor el tema porque la Constitución establece que el Poder Ejecutivo puede convocar al Congreso —no a una Cámara— a sesiones extraordinarias cuando un grave asunto de orden público lo requiera. Y a este fin basta el enunciado del asunto de orden o interés público que, en este caso, son los problemas de la discriminación u odio racial o religioso, que han tenido reciente manifestación en el país por algunas minorías alocadas que siempre quieren traer las ideas discriminatorias que la conciencia universal condena.

Nosotros venimos hoy, en este acto, a cooperar a resolver ese problema de orden o interés público, esta urgencia que el Poder Ejecutivo ha encontrado, reconocido y enunciado. E incluyó este asunto en el temario de sesiones extraordinarias con el fin de dar respuesta a esta urgencia, frente a la cual no quedamos atados de manos por el hecho de que para individualizarla se haya mencionado un expediente determinado. El Senado no queda como una Cámara paralizada porque la individualización haya tenido ese camino. No podría el Poder Ejecutivo limitar a una de las Cámaras del Congreso la posibilidad de considerar un asunto de interés público que él haya mencionado como uno de los temas incluidos en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Por ello, creo que debemos continuar. Si el señor presidente considera que es del caso y el señor senador por Jujuy insiste en que esto se trate previamente como una moción —él le dará la forma de vuelta a comisión o alguna otra—, que se vote, y continuemos tranquilamente la discusión sobre la que estamos avanzando con un buen trámite legislativo. Evitaremos así que un escrúpulo formalista se oponga al tratamiento de las leyes fundamentales que el país precisa.

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Algunas manifestaciones que ha formulado el señor senador de la Rúa me obligan a contestar, sobre todo la última en que sostiene que nuevamente una cuestión formalista impide dictar la ley. No admito esta apreciación del señor senador en cuanto está dirigida a mí; y me parece que incurre en un abuso parlamentario y roza el agravio a mi persona.

Si yo tuviera que expresar algo sobre la urgencia de esto, debería decir que la urgencia no se ha puesto de manifiesto pues el proyecto que vino a la Cámara de Senadores en 1985 caducó en la comisión. No hubo despacho. Recién en estas extraordinarias está inserto para su tratamiento en la forma en que he dicho cuando comencé mi exposición.

Estoy totalmente de acuerdo —y lo quiero repetir para que quede claramente establecido— en que esta ley es indispensable y humana, y coincide con los sentimientos del pueblo argentino, con lo que todos nosotros queremos.

No es una simple formalidad la que estoy planteando y no es cierto que el Poder Ejecutivo cuando convoca a extraordinarias nos esté impidiendo, a través de la forma en que lo ha hecho en este caso, que nosotros tratemos el tema. Cuando el Poder Ejecutivo convoca a extraordinarias indica un tema y generalmente manda su proyecto. Pero no vulnera los derechos del Parlamento por el hecho de que envíe su proyecto junto con la inclusión del tema en extraordinarias, porque en ese caso está indicando que ése es el tema básico sobre el que debemos deliberar. La Constitución dice que por asuntos que considere graves o urgentes el Poder Ejecutivo convoca a extraordinarias. Y su manera de estimarlo grave y urgente es enviando su propio proyecto. Esto no significa que el Parlamento vaya a decir "amén" a lo que el Poder Ejecutivo proponga en su proyecto. Lo podremos discutir, modificar y alterar inclusive en todos sus términos. Pero de algún modo, cuando el Poder Ejecutivo tiene, como poder colegislador, que iniciar ante el Parlamento el trámite de un asunto grave y urgente, lo envía a la Cámara de Diputados o a la de Senadores.

Estimo que cuando el Poder Ejecutivo ha determinado el título del tema y ha indicado de manera expresa —y tan expresa que así se interpretó en la Cámara de Diputados al iniciar el trámite parlamentario de ese proyecto— que ella es la Cámara iniciadora para el tratamiento del asunto grave y urgente que el Ejecutivo viene a plantear, en vista de que el proyecto primitivo del Poder Ejecutivo caducó en el Senado, no sé si nos está sancionando de alguna manera con esta forma de indicar el número de expediente con

que tramita el proyecto el señor diputado Cortese. El trámite parlamentario tiene importancia, —tal vez no la tenga para el Poder Ejecutivo, no lo sé, no lo puedo saber—, ya sea que se inicie en una Cámara o en otra.

El proyecto del diputado Cortese es diferente del inicial del Poder Ejecutivo en muchas cosas. Y el proyecto del señor senador de la Rúa también es muy diferente, sobre todo en el planteo de la naturaleza y extensión que se quiere dar en la aplicación de esta ley, lo que vamos a discutir en el momento en que se abra la discusión en particular.

De manera que no admito que se diga que estoy ocasionando una demora por el placer de ocasionarla, ni que estoy cercenando las facultades de este Senado de la Nación, ni que quiero que esta Cámara no hable más sobre este tema, ni que haya menoscabo para este Senado de la Nación.

Lo que yo digo es que cuando el Poder Ejecutivo ha indicado cuál es el tema y cuál es el proyecto que motiva su inclusión en el período de sesiones extraordinarias, está señalando no lo que nosotros queremos hacer, convirtiéndonos en Cámara iniciadora, sino lo que él ha estimado, por razones graves y urgentes, que es el orden en que debe ser tratado el asunto.

Según lo establece la Constitución el Poder Ejecutivo tiene, como poder colegislador, la facultad de determinar dónde inicia un asunto. Si lo inicia en la Cámara de Diputados, a su indicación debemos ajustarnos.

Estoy totalmente de acuerdo y en la discusión en particular de este asunto lo voy a demostrar, con cada una de las cláusulas que se están insertando para que se acaben las discriminaciones que se han suscitado y que se suscitan, no solamente con relación a motivaciones de raza que comprenden a sectores importantes de la población, como ha indicado el señor senador de la Rúa al aludir a la DAIA, sino con otros argentinos que sufren discriminaciones de raza y religión, como es el caso de nuestros aborígenes que están viendo y padeciendo cómo el Congreso de la Nación dictó una ley y transcurrieron dos años sin que se aplicara porque no se reglamenta. Ellos también están sufriendo discriminaciones.

De manera que no se trata de que yo me esté oponiendo a la sanción del proyecto de ley sino que estoy planteando una cuestión que es importante desde el punto de vista institucional: si está indicado cuál es el proyecto que el Poder Ejecutivo quiere que se tome para el inicio de la discusión, hay que respetarlo y a eso nos tenemos que ajustar.

Respeto mucho el estudio que ha hecho el señor senador —y estoy seguro de que lo ha hecho porque yo también he estudiado cada una de las cláusulas— y su preocupación por el tema.

Esta es una preocupación compartida. En el debate de la Cámara de Diputados quedó perfectamente demostrado. No hubo un solo legislador en ningún sector que no adhiera con la mayor elocuencia y sapiencia posible, a la necesidad del dictado de esta ley. No se trata entonces de una cuestión circunstancial, como se indica. La mía es una moción de orden para que el asunto vuelva a comisión y que ésta se expida no sólo acerca del proyecto en sí sino respecto de lo que yo planteo, es decir, si podemos convertirnos en Cámara iniciadora a pesar de lo que expresa el decreto de convocatoria.

Este es el punto respecto del cual no la persona del senador de la Rúa sino la comisión deberá expedirse e ilustrarnos para que podamos votar a conciencia si nos convertimos en Cámara iniciadora de este asunto.

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: quiero recordar a los señores senadores que éste es un asunto sobre el que hemos establecido un precedente. Es decir, es un tema que ya hemos resuelto antes. Cuando se trató la ley de patria potestad, lo hicimos en este Senado a partir de un proyecto de los senadores Menem y Sánchez en las sesiones ordinarias. Comenzaron las sesiones extraordinarias de ese año —el período inmediato siguiente— y el Poder Ejecutivo incluyó el tema en la convocatoria al mismo tiempo que enviaba un proyecto suyo a la Cámara de Diputados. Esta tomó en consideración el proyecto del Ejecutivo, ignorando la sanción anterior del Senado; era el mismo tema, y cuando vino al Senado emitimos un dictamen unánime en las comisiones señalando que la Cámara iniciadora era la de Senadores y que el tema que se trataba continuaba el trámite parlamentario de un proyecto de ley iniciado en el Senado. El Poder Ejecutivo no puede alterar ese trámite parlamentario. Fue así como aceptamos algunas de las enmiendas y otras no, devolviendo la iniciativa a la Cámara de Diputados con la declaración del Senado en el sentido de considerarse Cámara iniciadora; la Cámara de Diputados aceptó este temperamento.

De modo que allí establecimos bien que el Poder Ejecutivo puede convocar a extraordinarias pero no decidir cuál ha de ser la Cámara iniciadora en uno u otro asunto. En caso con-

trario, en la situación que comento, habría podido hacer variar la condición de Cámara iniciadora por el solo hecho de dar ingreso a su proyecto por Diputados y no respetar el trámite previo en el Senado.

Todo esto ha quedado ya claro. ¿Por qué traer la cuestión, entonces? No es obstruccionismo pero sí es formalismo, señor senador.

Más me habría complacido, y lo hubiera agradecido mucho, que la observación —ya que reconoce haber leído el proyecto con atención— hubiese sido hecha antes de empezar el debate, poniéndonos en conocimiento del planteo o hacer antes la advertencia, y no venir con la sorpresa de este planteo...

Sr. Martiarena. — Lo anticipé en la reunión de presidentes de bloque.

Sr. de la Rúa. — ...que exige una discusión amplia y puede insumir bastante tiempo.

Pido, señor presidente, que se ponga a votación la moción de pase a comisión, convencido de que podemos seguir con el trámite. Estamos bien encaminados y el tema está incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias, y por esta última circunstancia he presentado el proyecto de ley. Si fuera válida la interpretación del señor senador, ninguno de nosotros podría presentar un proyecto de ley referido a asuntos que el Poder Ejecutivo haya incluido en el temario y propuesto a la otra Cámara, individualizando la cuestión con la indicación de un expediente.

Lo que importa es que el tema es la discriminación racial, lo que es bien sabido y conocido. Es de interés público que se trate y nosotros podemos considerarlo y llevar adelante su debate.

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — De ninguna manera creo, y seguramente nadie lo hace, que aquí haya un propósito obstruccionista de parte del señor senador Martiarena.

Hay sí una consecuencia ideológica o jurídica que no hace sino reiterar las dudas que planteó a la Cámara cuando no hace mucho tiempo tratamos la ley de asociaciones profesionales.

Entiendo que también nosotros seremos consecuentes con la posición que entonces sostuvimos, interpretando la Constitución Nacional con relación a los asuntos que podrían ser materia de tratamiento en sesiones extraordinarias, diferenciándolos de los proyectos de ley pendientes. Además de la jurisprudencia que acaba de citar el señor senador de la Rúa, traigo también a colación a este recinto la que con criterio coincidente se estableció en esa oportunidad, al tratar la Ley de Asociaciones Profesionales.

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — Corresponde someter a votación la moción de orden. Se va a llamar para votar.

—Así se hace.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Martiarena de que el proyecto de ley impreso en el Orden del Día número 259 vuelva a comisión, para considerar la procedencia de su tratamiento por el Senado en el período de sesiones extraordinarias.

—La votación resulta negativa.

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — Queda rechazada la moción.

Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías en el proyecto de ley del señor senador de la Rúa, sobre prohibición y sanción de actos discriminatorios.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: continúo con la explicación del contenido de este proyecto de ley que tiene tres aspectos fundamentales.

El primero, es una norma de carácter civil que permite a cualquier particular reclamar judicialmente la protección del ejercicio, sobre bases igualitarias, de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Es una forma de resolver en una única norma los múltiples problemas que en su momento y con dificultades técnicas quiso solucionar y considerar la Cámara de Diputados, porque en el texto que llegó la primera vez al Senado, a la figura inicial que prohibía la discriminación se agregaban una serie de regulaciones particulares y de excepciones posibles. En cambio, aquí se define en un único texto que parte del principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional y se refiere a los actos arbitrarios que invaden el ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos, que constituyen el concepto esencial de la discriminación como acto arbitrario irrazonable de privación de derechos fundamentales. De esta manera, se hace la mención específica de los actos motivados por cuestiones tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.

Sólo debo expresar que en la discusión en particular propondré el agregado de una palabra que hemos omitido en el segundo párrafo de este artículo. Donde dice: "A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones determinados por moti-

vos tales como raza, religión...", etcétera, debe decir: "...los actos u omisiones discriminatorios...", porque es el concepto básico de la discriminación a lo que nos estamos refiriendo.

Luego el proyecto contiene una serie de modificaciones del Código Penal por las cuales se aumentan las penas y se amplía la calificación del homicidio.

En el artículo 2º, se considera homicidio calificado al que se cometa "por placer, codicia, persecución u odio hacia una raza, religión, nacionalidad o ideas políticas".

A su vez, se aumenta la pena para el homicidio o lesiones en riña, para la privación ilegítima de la libertad, para los delitos de amenaza, de daño y de incendio, cuando sean motivados por persecución u odio hacia una raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

La idea o concepto básico que aquí se introduce es el de odio o persecución racial o religiosa. Esta es la idea, el carácter y la naturaleza de la conducta que habrá de atrapar el Código Penal.

Otro aspecto principal es la incorporación de una nueva figura penal. Por ella se castiga con pena de un mes a tres años a los que "...participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaran a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas".

Este proyecto de ley tiende a concretar prácticamente múltiples convenciones internacionales a las que está adherido nuestro país. Ya el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos del Hombre, que tiene carácter de recomendación pero que, en realidad, importa un valor superior para la comunidad internacional. En su artículo 2º se declara que: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política y de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".

Allí está la fuente inicial de la norma contenida en este proyecto y en otras iniciativas que trataron la misma cuestión.

El artículo 7º de esa declaración dice que "...todos son iguales ante la ley y tienen, sin

distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación".

El artículo 8º señala: "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley".

En nuestro país, en 1956, mediante el decreto 6.286, se aprueba la Convención sobre Prevención y Sanción del Genocidio, tema que requerirá una ley específica e independiente.

Por medio de la ley 17.722 la Argentina ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965, la que recomendaba el dictado de normas legales para la implementación de una política en tal sentido y la ejecución de acciones gubernamentales tendientes a erradicar la discriminación contra grupos raciales.

Y bien, señor presidente. Estamos legislando en la materia. Los fundamentos de la última convención internacional mencionada sostienen que "... todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la discriminación ...".

Precisamente, como quedó dicho, la figura de la incitación a la discriminación es la que está recogida en el proyecto bajo examen. Así queda manifestado en la modificación propuesta al artículo 213 ter del Código Penal, tal como se indica en el artículo 9º de esta iniciativa que estamos tratando.

Es importante rescatar la filosofía que informa y sustenta lo aprobado por la convención internacional a que me estoy refiriendo porque, precisamente, es la misma que nosotros adoptamos y defendemos en este debate. Estamos absolutamente convencidos "de que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa". Reafirmamos por eso "que la discriminación entre seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico, constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia de las personas aún dentro de un mismo Estado".

La causa de la paz y de la convivencia requiere el respeto a los principios de la Nación Argentina.

igualdad de todos y la preservación de los derechos fundamentales de la persona.

Esto es lo que procuramos con este proyecto de ley, importante para la realidad argentina actual, donde aunque el problema no haya alcanzado niveles de gravedad, es necesario que a través de la sanción de una iniciativa como ésta se proclame también la sanción moral para las mentalidades retrógradas y antidemocráticas que creen que con actitudes de discriminación, de odio o de hostigamiento hacia otras personas, por razón de su raza, religión, condición física o sexo pueden dar curso a sus pensamientos o ideas.

Quiero mencionar otro antecedente. Me refiero a la Convención contra la Discriminación en la Enseñanza, sancionada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura —UNESCO— en su undécima reunión en París, del 14 de noviembre al 15 de diciembre de 1960. Esta convención es importante porque contiene un concepto de discriminación que sirve para la interpretación del texto que estamos sancionando.

La ley no debe definir, pero el legislador puede mencionar en sus fundamentos los conceptos que ha querido incluir en la ley.

Según esta Convención que nosotros, en el concepto, hacemos propia, "se entiende por 'discriminación' toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza ...", que es el tema a que se refiere esta Convención.

En cuanto a la igualdad en el trato diré que en la idea de la discriminación hay un intento de menoscabo, de disminución de la persona discriminada, queriendo afectar en ella al grupo al que la persona pertenece.

La ley 17.677, a su vez, ratificó el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo que proscribió la discriminación en materia de empleo y ocupación.

La ley 23.054, sancionada en 1984 por este Congreso, aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada en San José de Costa Rica en 1969. Su artículo 1º establece que "Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social", recogiendo los antecedentes de las convenciones anteriores celebradas en el ámbito de las Naciones Unidas.

La ley 23.313, sancionada en 1986, aprobó los pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Su contenido es similar al Pacto de San José de Costa Rica.

Pero quiero citar también, porque es el antecedente inmediato, el texto del artículo 1º de la ley 23.179, que ratificó la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Y esta Convención define también el concepto de discriminación contra la mujer, que denota "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera".

Con el espíritu y la letra de estas convenciones, muchos países han sancionado las normas consecuentes. Es el caso de Japón, que establece en su Ley Fundamental que "Todas las personas son iguales ante la ley, y no se admitirán discriminaciones en las relaciones políticas, económicas y sociales en virtud de raza, credo, sexo, estado social u origen familiar".

La República Federal de Alemania, también en su Ley Fundamental, establece: "Nadie podrá ser perjudicado ni privilegiado en consecuencia a su sexo, ascendencia, raza, idioma, patria y origen, creencias y concepciones religiosas o filosóficas".

La Constitución de España dispone: "Sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Por su parte, la Constitución de Italia pone como obligación de la República suprimir los obstáculos de orden económico y social.

Pero estoy hablando de las normas más recientes. La historia de la humanidad es un poco la historia de la lucha por la libertad y la dignidad del hombre. Y esa lucha culmina en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Constituyente

francesa de 1789 que los proclama a la faz de la Tierra.

En 1787, la Constitución de los Estados Unidos proclamó también los derechos fundamentales de la persona.

En 1853, la Nación Argentina declaró en su Constitución la extinción de la esclavitud en cualquiera de sus formas. Los esclavos serían libres por el solo hecho de pisar el territorio argentino; y los pocos que hubiere todavía en el país quedarían libres al momento de la jura de la Constitución.

El artículo 16 establece que no existen en el país privilegios de sangre ni títulos de nobleza, que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. También dispone que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Este documento, paradigma de los derechos de la persona y de la igualdad fundamental del ser humano en todas las circunstancias, tiene el mérito del tiempo y de la época en que fue sancionado. Encuentra su antecedente en la famosa Asamblea del Año XIII que proclamó la libertad de vientres y mandó quemar los instrumentos de tortura.

Estas normas de la Constitución Nacional son las que expresan el espíritu resumido en su Preámbulo, que llama a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino a venir a nuestra tierra, con los mismos derechos y garantías que se reconocen a los nativos.

Fue precisamente esa convocatoria generosa de la Argentina expresada en el Preámbulo de su Constitución la que convocó a las vastas corrientes migratorias que vinieron a poblar nuestro territorio. Entre ellas, los grupos representativos de la comunidad judía de aquel tiempo que vinieron a la Argentina y se incorporaron a su trabajo y a la creación de su riqueza. Tiempo difícil aquél, el de esos años, para quienes sufriendo en otras partes discriminación y persecuciones, decidieron tomar el camino de la emigración y viajaron a estas tierras.

Recuerdo que en 1964 se realizó en la Cámara de Diputados una interpelación al ministro del Interior con motivo de problemas por algunos actos de persecución racial y religiosa impulsados por algunos grupos, como el Tacuara, que luego se extinguió y desapareció. En esa ocasión, el ministro Juan Palmero pronunció unas palabras que quiero recordar esta noche. Dijo: "También estuvieron en todo el proceso histórico los hombres de esta raza. Pero hubo un instante en que el dolor de las persecuciones les hacía

buscar con ansiedad las tierras nuevas, caminos nuevamente prometidos por la angustia. Hubo entonces, como dijéramos alguna vez, 'tiempo de inquietud, sobresalto, persecución y vejamen, que es como decir de escondidas ansias de huida y búsqueda'. Entonces 'cada cual, como antena inmensa tendida a todos los rumbos, escuchaba y soñaba con una tierra nueva'. Alguien debió decir Argentina, y quizá un silencio se hiciera en la rueda, el anciano dejara de musitar su oración e irguiera su cuerpo, y dilataran las mujeres sus pupilas en busca de esperanza y de paz. Polonia, Austria, Hungría, Rusia y otros nombres marcan el rumbo del derrotero de aquel sufrimiento que dice la crónica de aquel 14 de agosto de 1889, cuando llegaron los primeros ochocientos treinta y seis judíos organizados para ir al encuentro de esta tierra que no les defraudaría jamás. Y vinieron los hijos y los nietos y hombres de otras tierras, y el país nunca les hizo el interrogante de su fe o de su raza, porque nosotros no tenemos centinelas en el templo, porque no puede haber censura entre el hombre y su oración. Este es un país desprevenido y generoso frente al extranjero".

Este es un país que cree en la libertad. La inmensa mayoría de los argentinos defiende la igualdad y respeta a todas las personas sin distinción de origen o características. Mas no podemos ignorar la realidad que padeció el mundo, o la que lamentablemente a veces aparece expresada por minorías reaccionarias entre nosotros, como manifestación de un fanatismo incomprensible que busca en la discriminación o la persecución la satisfacción de atávicas inclinaciones.

Todos sabemos lo que significó en el mundo la expresión más dramática y más cruel del racismo que tuvo lugar en la Alemania hitlerista, cuando en 1933 la doctrina de la superioridad y de la desigualdad de las razas humanas fue elevada a doctrina de Estado. Doctrina de Estado que provocó que Europa tuviera doce millones de bajas civiles fuera de los campos de batalla, y significó la aniquilación física de seis millones de judíos, la más criminal que registra la historia. ¡Cómo no habríamos de ser sensibles, aunque estemos tan lejos de que algo semejante sea posible en nuestra tierra!

Frente a esa experiencia es importante que reafirmemos esos valores que las grandes convenciones internacionales han expresado ante el consenso universal. ¿Cómo podríamos permanecer insensibles cuando cruzando el océano, en Sudáfrica, rige la cruenta política del "apartheid", que constituye la forma más cruel de la discriminación en los tiempos modernos de la in-

ticia por razón de la raza o del color de la piel? Allí todavía tienen los omnibus la inscripción "Sólo para blancos" y se les exige a los hombres de raza negra, nativos de la tierra, identificarse de manera particular, privándolos de los derechos más elementales.

¿Cómo podríamos no percibir el reclamo que se expresó en la plaza pública cuando la DAIA convocó a una manifestación contra la discriminación? Para algunos hay demasiada sensibilidad a veces pero con frecuencia la justa indignación es encendida por la actitud de algunas minorías.

Es importante entonces que por medio de este proyecto de ley todos los sectores políticos del país manifiesten su repudio a la discriminación y la persecución racial o religiosa. Esta ley quiere ser, más que una ley de castigo, una convocatoria a la solidaridad, una expresión moral de un sentido de vida que nuestro pueblo proclama en la Constitución y quiere practicar en el ejercicio de las virtudes cotidianas.

Por eso traemos este proyecto. No hemos procurado tomar la delantera sino impulsar el trámite. No tratamos de sacarle ventaja a la Cámara de Diputados sino de avanzar en algo donde la coincidencia se expresa en la similitud de los proyectos. Estamos conscientes los senadores y los diputados de la necesidad de obtener su sanción.

Si la Cámara de Diputados no puede tratarlo todavía, bien podemos hacerlo nosotros, avanzando en el trámite de este proyecto de ley tan importante que, por otra parte, se originó en la iniciativa enviada en su momento por el Poder Ejecutivo nacional y que debe culminar en una formulación lo más adecuada posible desde el punto de vista técnico para incorporar figuras nuevas que a veces no son fáciles. No podemos olvidar que, al tiempo que establecemos una prohibición o una sanción para preservar una libertad y un derecho, estamos arriesgando, si la formulación es equívoca, la libertad o el derecho para ciertos casos o situaciones, en un país donde el pluralismo y la libertad de crítica existen con amplitud.

Por eso hay que entender bien el concepto esencial del proyecto de ley que propiciamos. No es cualquier discrepancia o cualquier polémica o diferencia; no se trata de cercenar la libertad de pensamiento. El concepto es el que parte de la idea de igualdad, que es una garantía constitucional y se refiere a los actos arbitrarios y discriminatorios que vulneran el ejercicio, en condiciones igualitarias, de los derechos de la Constitución. Y, cuando se trata de la cuestión penal, lo que se castiga más gravemente son los actos de odio o persecución por motivos

raciales o religiosos y los actos de propaganda o incitación al odio racial o religioso.

Ocurre que existe la libertad para expresar cualquier idea pero no para hacer la apología del crimen ni para incitar a que haya odios raciales o religiosos en la sociedad argentina, que quiere vivir en paz y en el respeto a la igualdad y dignidad de todas las personas.

La ley no bastará por sí para adecuar todas las conductas. La ley las orienta, pero lo que cuenta es el comportamiento de los hombres. La ley no bastará para desterrar por sí sola todos los males que intentamos combatir: no basta porque las normas no tienen efecto instantáneo transformador de la sociedad. Hay ciertas actitudes, reacciones instintivas, prejuicios, sentimientos disvaliosos, que sólo desaparecen en la medida en que son extirpados o eliminados del corazón de los hombres, de lo íntimo de las conciencias. Y, para esto, además de la ley hace falta que en la educación se hable de paz, de amor y de igualdad.

En este sentido, aunque las leyes no dirijan por sí solas todas las conductas, tienen fuerza formadora de mentalidades y conciencias al sancionar los comportamientos que la moral repudia. En este final del siglo XX siguen necesitándose gestos ejemplares de tolerancia y respeto, que sean capaces de superar incluso siglos de desconocimiento y desconfianza. Por ello, el mundo se conmovió con ese ejemplo de convivencia, amor y tolerancia del papa Juan Pablo II, cuando visitó la sinagoga de Roma y puso de manifiesto la riqueza de un patrimonio común.

Expresión de esta conciencia es la realidad de la humanidad, que no deja aún hoy de avergonzarse y horrorizarse ante el holocausto que provocó hace apenas medio siglo el odio irracional y patológico de esa tremenda fuerza del mal que fue el nazismo.

Al presentar este proyecto pensamos en todos los marginados, en todos los que sufren discriminaciones de hecho por la injusticia. Pienso en los aborígenes que visité en el Norte, en los indígenas de mi patria, destinatarios de esa ley que aún no se reglamentó, que son ciudadanos y tienen derecho a esta igualdad, a no padecer diferencias o discriminación.

Para ellos también vale el concepto, referido a la discriminación por razones de raza, religión u origen étnico, contenido en este proyecto de ley. Pero debemos plasmarlo en la realidad de los hechos para darles acceso a una igualdad a partir de un mejor nivel de vida, poniendo en marcha la ley que los protege y contempla su situación.

Y también, como recordaba hace un momento, comprende las discriminaciones crueles como el "apartheid", y desde luego la actitud que cada tanto aparece, de los que pintan la svástica en una pared argentina y quieren introducir en esta sociedad pacífica, que quiere vivir en solidaridad y amor, el desencuentro, con manifestaciones de odio y de violencia.

Por eso nosotros, al votar este proyecto, estamos votando también por la causa de la paz y de la solidaridad.

Sé que en la Argentina ninguna colectividad debe sentir temor o miedo. Los argentinos hemos fortalecido nuestra nacionalidad en la mezcla de las razas y uniendo en nuestras familias a hombres y mujeres de distinto origen y podemos proclamar que todos sentimos como una perspectiva horrible que nuestros hijos sean de una raza de perseguidores o de perseguidos. Nos enorgullece saber que estamos todos juntos tras el afán de una comunidad en la armonía, en la cordialidad, en el trabajo, en la fraternidad, como en toda América latina que sin odios viene transitando el camino de sus pueblos.

Repudiamos la violencia, que la democracia no admite. Somos un pueblo hecho para la justicia y la libertad. Por esa razón podemos reclamar de todos los sectores políticos y de todos los habitantes del país que nos comprometamos a desterrar para siempre de la República los sentimientos malvados capaces de disociar el ser argentino. Debemos unirnos en los objetivos comunes a los que ningún hijo de esta tierra puede renunciar: la grandeza del país, la paz, la fe en los representantes del pueblo, el respeto de la ley y la justicia, que son los pilares fundamentales del progreso, convencidos de que todos queremos vivir en paz y que nuestros hombres y mujeres se han desengañado de la prédica del odio, que no puede existir entre argentinos y hombres de bien.

Estamos andando el camino de la solidaridad, la fraternidad y la convivencia. Argentina se presenta ante la conciencia universal con leyes como ésta, que no es una obra personal exclusiva, sino el reflejo de un estado de ánimo colectivo. Es una síntesis de los trabajos hechos por todos, recogidos de aquellas convenciones que expresan el pensamiento del mundo libre, consignados ya en trabajos como el del senador Jiménez Montilla, quien ha elaborado un magnífico proyecto de Código Penal, donde la sanción del odio y de la persecución por causas raciales o religiosas está prevista; el proyecto del Poder Ejecutivo, que abrió la iniciativa, no

por una exigencia sino por una convicción; los trabajos de la mayoría en la Honorable Cámara de Diputados magníficamente expuestos por el miembro informante, diputado Cornaglia, y las disidencias de los diputados Cortese y Fappiano, que fueron la base para el proyecto actual del diputado Cortese.

Tenemos, desde luego, similitudes; hay algunas diferencias, pero no vamos a entrar en la cuestión de quién puso la primera nota o quién lo sacó primero, porque lo que importa no es que haya un autor; el mérito no será de un autor determinado sino de la obra conjunta de todos los legisladores de la Nación convencidos de que es necesaria una ley que dé respuesta a esas expectativas y muestre una voluntad sólida de la Nación, a través de sus legítimos representantes en el Congreso, de condenar definitivamente toda forma de odio y persecución racial o religiosa, o cualquier forma de discriminación que, en definitiva, vulnera el principio de igualdad contenido en nuestra Constitución.

Así podremos presentarnos ante la conciencia universal con esta ley que consagra el respeto a la persona humana y confirma la fórmula incorporada a nuestra tradición, y es el fundamento del concepto de nuestras libertades: "Los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos".

Por estas razones, señor presidente, sin entrar ahora en el análisis particularizado del proyecto, y en la creencia de que el esquema que he formulado es suficiente para la comprensión de su alcance, pido al Honorable Senado la aprobación del dictamen de la comisión, con el convencimiento de que de esta manera estaremos contribuyendo a hacer de la nuestra una sociedad más justa, más libre y más igualitaria, sólidamente asentada en el respeto a la dignidad de la persona y de sus derechos.

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Jiménez Montilla. — Señores presidente: resulta un tanto difícil hablar sobre este tema de tanta importancia y extrema delicadeza cuando previamente lo ha hecho en forma tan medulosa el autor del proyecto, senador por la Capital, doctor de la Rúa.

Sin embargo, voy a tratar, en la medida de lo posible, de aportar algunos elementos que sirvan de antecedente para la consideración referida a estos ilícitos, y que permitan darnos una mayor solidez en la argumentación para que la eficacia llegue al punto de que quienes deseen votar favorablemente el proyecto y quienes van a beneficiarse con él, lo hagan con entusiasmo.

Si algún resquicio de formalidad pudiera pensarse que existe, creo que con el tiempo se va a desvanecer, teniendo en cuenta que existe la secreta esperanza de que la Comisión de Legislación General, al llegar el próximo período de sesiones ordinarias pueda considerar un proyecto de Código Penal —parte general y parte especial— que presentara el senador que habla y que tuvo entrada el 28 de agosto de 1986 con el número 585.

Pienso que juntamente con todas las disposiciones penales mencionadas, no solamente las que ha sancionado la Cámara de Diputados sino también las que ha sancionado la Cámara de Senadores, podemos recordar en este momento una que también fuera presentada por el señor senador por la Capital, y que se trata de un instituto jurídico referido al que denominaba "la piratería del asfalto". Todas pueden ser incorporadas.

Amén de estas disposiciones en tratamiento, que aluden a hechos discriminatorios, todas podrían quedar comprendidas en un mismo código, en el mismo proyecto de código que está en estudio en comisión, teniendo en cuenta que surge que algunas de las figuras, de los tipos que ha considerado el doctor de la Rúa, ya se encuentran comprendidos en el proyecto a que hago referencia.

Quiero poner de manifiesto algunos antecedentes extranjeros sobre esta cuestión. Previamente, quiero expresar que respecto de los actos discriminatorios han puesto un mayor celo ya que han llegado a comprender la intimidación y los casos de incitación. Es decir que van más allá de lo referido a la violencia, que es lo que uno puede encontrar dentro de lo que se acepta a través de los antecedentes existentes.

Nos llama la atención también, señores senadores, que a la par de grandes naciones del mundo existan algunos pequeños Estados que cuenten con disposiciones legales para estos tipos de figuras delictivas.

Yo tengo aquí anotado que en Rusia se establece pena para toda propaganda o agitación encaminada a incitar a la enemistad o a la discordia racial o nacional o toda restricción directa o indirecta de los derechos y toda institución de privilegio directa o indirecta en favor de cualquier ciudadano por motivo de raza o nacionalidad.

En Australia se incluye como acto punible la incitación, entre otras, a la discriminación racial, lo que se sanciona con severidad.

A su vez, una pequeña isla en las Antillas de no más de 200 mil habitantes establece la figu-

ra delictiva como la provocación al odio contra cualquier sector de población que se distinga por el color, la raza o las creencias. Es la isla de Barbados.

Hay otras grandes naciones, como Bulgaria, que determinan que toda acción destinada a provocar o instigar la animosidad racial o nacional, el odio o la discriminación, es delito.

El caso de Dinamarca va más allá todavía, ya que habla de una declaración de cualquier tipo que suponga una amenaza para uno o varios grupos de personas a quienes ridiculice o humille debido a su raza, color, origen nacional o étnico o religión.

Se puede apreciar allí cómo ha ido avanzando la legislación y la protección que se brinda a las distintas razas y credos.

En Francia se promulgó una ley contra el racismo el 1º de julio de 1972, que castiga cualquier tipo de incitación. A su vez la República Federal Alemana, en su ley de reforma del Código Penal, del 23 de noviembre de 1973, estableció que considera delito la incitación al odio racial, mientras la República Democrática Alemana, en el artículo 91 de su Código Penal establece pena para toda persona que actúe con la intención de perseguir, expulsar o destruir total o parcialmente a grupos nacionales, étnicos raciales o religiosos.

Asimismo, Hungría cuenta con el decreto ley número 35 de 1970 sobre el acto discriminatorio, que pena a toda persona que cometa en público un acto que pueda incitar al odio contra cualquier pueblo, y de igual forma podemos citar las disposiciones legales que tiene Suecia, cuya ley del 27 de mayo de 1970 ha introducido en el Código Penal modificaciones que se agregan a las disposiciones vigentes relativas a la agitación contra grupos étnicos, los delitos de amenazar o insultar a un grupo étnico públicamente o a través de cualquier medio de comunicación dirigido al público, por motivos de raza, color, origen nacional o étnico o creencias religiosas.

Señores legisladores, todos estos antecedentes nos obligan realmente como un deber moral a dar sanción a esta normativa para evitar todo tipo de discriminación, que conlleva la disminución no física pero sí ética y moral de una nación. En caso contrario no podremos hablar con la propiedad necesaria con las grandes naciones.

Ante estas circunstancias, voy a mencionar algunos antecedentes nacionales, y entre ellos me voy a tomar la libertad de citar algunas de las exposiciones o documentos emanados del Primer Congreso Contra el Racismo y el Antisemitismo celebrado en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires los días 6 y 7 de agosto de 1938.

Aclaro que a este congreso asistieron grandes personalidades, encabezadas por el doctor Lisandro de la Torre y figuran entre los asistentes Eduardo Lauréncena, Mario Bravo, Julio Noble, Leónidas Anastasi, Diego Luis Molinari, Arturo Frondizi, Arturo Illia, Ernesto Sanmartino, etcétera. De tal manera que este Congreso seguramente tuvo una importancia fundamental en esa época, en 1938, hace cincuenta años.

Entre algunos de esos magníficos pensamientos figuran los siguientes: "Después de la gran guerra, problemas que no habían tenido repercusión entre nosotros, comienzan a agitar la conciencia de hombres y grupos. La crisis ha sido tan profunda que todo fue conmovido: la estructura material y moral del mundo social, las ideas y los regímenes, las costumbres y las instituciones. Algunos de esos problemas sólo habían tenido formulación teórica en ciertas mentes ultraconservadoras. Entre ellos, el problema racial y concretamente, el problema judío. Hoy, en nuestro país, como en muchos otros de América, ha dejado de ser un problema. Es un hecho y un hecho grave en sus proyecciones y en su significación para el futuro democrático de nuestras instituciones y de nuestra historia civil". Detrás de la sistemática campaña racial, está el odio a todo lo que es y quiere seguir siendo libre y digno. "A todos incumbe defender esa libertad y esa dignidad".

"El racismo —dice— envuelve una injuria a la humanidad; renacen en nuestro siglo las mezquinas categorías de libres y esclavos; patricios y plebeyos; pueblo y autocracia. El infundio de las razas puras ha permitido la crueldad de horrendas persecuciones. Las fomentará más aún si la resolución de los hombres sinceramente comprometidos de la miseria racista no se dispone a impedir que ella se extienda por el mundo.

"Para hacer realidad la conciencia de ese deber, necesitamos de la colaboración de todos los argentinos y de los que viven en nuestro país."

Cuando se refiere al racismo y al derecho internacional argentino el relator oficial, que es el doctor Rudecindo Martínez, expone: "Que es indispensable reconocer, como condición esencial de paz interna e internacional, que ningún Estado ni gobierno del mundo debe restringir los derechos por motivos de índole racial o religiosa.

"Que a los fines de garantizar en una forma eficaz esos derechos se hace necesaria su consagración internacional mediante una convención obligatoria para todos los Estados, y la creación de un tribunal especial, o la admisión de las acciones y recursos de los damnificados ante la Corte Permanente Internacional de Justicia para los casos en que esos derechos sean desconocidos por razones de raza o de religión.

"Que en el caso especial de los pueblos de América, que han consagrado el *jus soli* y reconocido en sus constituciones la igualdad de los derechos civiles para nacionales y extranjeros, no cabe hablar de minorías raciales o religiosas ni nacionales —que de ningún modo deben admitirse— y sí, en cambio, exigir de los gobiernos de estos países el estricto y leal cumplimiento de los principios contenidos a este respecto en sus respectivas Cartas Constitucionales."

Todos estos conceptos, señores senadores, han salido del I Congreso Contra el Racismo y el Antisemitismo y constituyen una muestra clara y evidente del espíritu que debe guiarnos en esta delicada cuestión. Desde hace muchos años grupos étnicos distintos a los nuestros, de otras nacionalidades, religiones e ideas políticas, conviven en nuestro país y, sin duda alguna, están asimilados a la Argentina y son tan respetuosos de ella como cualquier ciudadano nativo.

Por todo ello, son muy importantes las disposiciones que estamos considerando. Una breve recorrida de los antecedentes argentinos en esta materia nos permitirá completar nuestro análisis y llegar al tiempo actual.

Nuestro Código Penal vigente es el aprobado por la ley 11.179 del año 1921, cuyo autor fue el doctor Rodolfo Moreno. Muchas disposiciones se cruzaron en el camino hasta llegar a la última ley, que es la número 21.338, la que contenía muchas cláusulas absorbidas por el Proceso y que fueron derogadas nuevamente para volver a la etapa anterior.

En el artículo 80, inciso 4º, del Código Penal aparece la figura del odio racial o religioso, que tuvo cabida ya en el año 1963, por medio del decreto 4.778, en época del doctor Frondizi. Más tarde fue derogada esa figura por la ley 16.648 del año 1964. Reaparece en el decreto ley 17.567, derogado en 1973 por la ley 20.509, volviendo a surgir en la ley 21.338. Cabe destacar que todas estas disposiciones incorporando la figura mencionada han tenido su fuente en el artículo 111, inciso 4º, del proyecto presentado por el doctor Sebastián Soler en 1960.

Como ya se mencionó, la Argentina adhirió a lo resuelto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948, en materia de condena del genocidio.

Sin embargo, todas estas disposiciones no comprendían algo que es muy importante: la discriminación o el odio por razones de tipo político.

En nuestro proyecto de Código Penal, al referirnos a la figura del homicidio agravado, sostuvimos que "...merituyendo el proyecto del Poder Ejecutivo del año 1982, en in-

día sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, se integran como circunstancias agravantes del homicidio... las de nacionalidad, ideas políticas o gremiales...".

Debo decir que todos los proyectos de Código Penal se quedan en la primera parte. No se llega a la segunda y como hay muchas comisiones que han sido designadas para formular un proyecto de reforma integral a dicho código, esa situación nunca se produce.

El artículo 95 del Código Penal, referido a homicidio y lesiones en riña agravados, está contemplado en la iniciativa del doctor de la Rúa. Sin embargo, su propuesta no tiene otro antecedente y realmente introduce una figura que merece una consideración muy especial.

El artículo 142, inciso 1º, del Código referido a la privación ilegítima de la libertad agravada, se compagina con el artículo 130, inciso 1º, de nuestro proyecto, sobre el que dijimos oportunamente: "Se completan los fines que califican el hecho penado en el inciso 1º del artículo 142 del Código, agregándose los 'raciales', siguiendo así el temperamento expuesto por la ley 21.338 en el tratamiento de la norma referida donde pone en evidencia que 'el autor comete el delito con un fin racial si lo hace en razón de su odio o aversión hacia la raza de la víctima o lo hace en pro, defensa, o adhesión a una raza humana'". Este caso fue analizado por el profesor Núñez a partir de la ley 21.338, parte especial.

En el artículo 149 bis del Código Penal —amenazas agravadas—, aparece una nueva figura presentada por el proyecto del señor senador de la Rúa. No hay antecedentes en el Código Penal en vigencia, pero sí fue insertado en esta iniciativa donde hablamos de las coacciones o amenazas. Se agrava justamente en razón de la discriminación de que se trata.

En el artículo 149 ter del Código Penal —agravación de las amenazas— la figura está contenida en el artículo respectivo del proyecto de Código, con una diferencia con la del señor senador de la Rúa en cuanto a su extensión. A su vez, el senador de la Rúa propone el agregado de un inciso 6º en el artículo 184 del Código Penal, que es el daño agravado. Se trata de una figura muy interesante y nueva, como también lo es la inserción en el artículo 186 del Código Penal, en la parte de incendios y otros estragos, propuesta por el señor senador por la Capital.

También veo que entre los atentados contra el orden público hay una figura nueva propuesta por el proyecto presentado, mientras que en el proyecto de código existente se la

contempla como una apología. Se ha procedido a su redacción conforme en su primer párrafo con el artículo 213 del Código, y en el segundo teniendo en consideración el proyecto del Poder Ejecutivo de 1984, que ha merecido la sanción de la Cámara de Diputados de la Nación asentando el principio recogido en su artículo 14. La creación de esta norma ha provocado, entre otros hechos, el hostigamiento de grupos de población, observándose la propaganda de tipo antisemita a través de publicaciones, inscripciones, etcétera y los aislados pero regulares atentados contra templos, escuelas, comercios, etcétera, de la colectividad judía, como asimismo otras persecuciones étnicas o de color. Ninguno de estos hechos alcanzan por ahora una magnitud extremadamente grave, pero la sociedad debe estar protegida contra una posible intensificación de actitudes discriminatorias y hostiles dirigidas a determinadas clases de habitantes, como bien lo reconoce el proyecto aludido.

Señor presidente: entiendo que ha llegado la hora de considerar el proyecto en cuestión. El odio racial, sin duda alguna, divide y posibilita la disgregación social. Iguales consecuencias provoca la discriminación por razones de religión, nacionalidad o ideas políticas. En el transcurso del tiempo los hechos históricos nos han demostrado el peligro latente que significa toda clase de absolutismo bajo cualquiera de sus disfraces totalitarios, ya que coloca a la sociedad ante la posibilidad de ser herida, destruyéndosele los valores éticos que la conforman.

Por todo ello, a toda costa debemos reaccionar contra cualquier forma de discriminación y buscar la posibilidad de construir un verdadero andamiaje jurídico para luchar contra esa situación.

Es lo que haría todo el mundo civilizado y todo el mundo democrático a la hora de buscar la forma de llevar a cabo estas presentes y futuras realizaciones, que hoy en día se pueden hacer teniendo como base la libertad y la independencia de criterio asentadas sobre una democracia constitucional.

Al analizar este proyecto para darle debida sanción sin duda alguna hemos tomado la precaución de consultar los antecedentes no sólo extranjeros sino también nacionales, y hemos podido observar que muchas de las instituciones jurídicas que conforman el Código Penal o muchas de las conductas penadas por la ley, merecen o pueden recibir una pena más elevada cuando se trata de hechos en los que entra en juego la discriminación.

A título de ejemplo, voy a hacer mención de la injuria a que se refiere el artículo 110 del Código Penal, o de los abortos —sean comunes, terapéuticos o sentimentales— mencionados en los artículos 85 y siguientes del mismo cuerpo legal; de la supresión y suposición del estado civil, del artículo 138; del caso de extorsión, del artículo 168, o del secuestro extorsivo, del artículo 170; de las violaciones agravadas, del artículo 122; del abandono de personas, referido en el artículo 103, así como también lo vinculando a las lesiones, de los artículos 89 y siguientes de dicho Código.

Todos ellos admiten un agravante de la pena por razones de discriminación cuando el delito se impone sobre ciertas o determinadas personas, o por ideas políticas, nacionalidad o religión.

Además, entiendo que sería viable, como una forma de dar solución a todos estos problemas, la inserción en la primera parte de un cuerpo legal o código, de una norma de carácter general que determine que en los casos de delitos por actos de discriminación la pena se elevará en un porcentaje entre el 25 y el 50 por ciento de la misma.

Señor presidente, señores senadores: la posibilidad de una coexistencia armónica con seres de distintas razas, nacionalidades o ideas políticas hace al futuro de una nación democrática. Dios ha de querer que podamos volcar —no sólo en esta oportunidad sino en cuantas otras se nos presenten— nuevas disposiciones como las de hoy y que se incrementen y se mejoren. De esa forma, tal vez un día podamos decir que nuestra bicolor celeste y blanca seguirá navegando y surcando todos los cielos y mares del mundo, con la prestantia propia de la bandera de un pueblo como el nuestro, que hoy hemos reivindicado.

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Honorable Cámara...

Sr. Bravo. — ¿Me permite una interrupción, señor senador, para formular una moción de orden?

Solicito que se llame a los señores senadores. Creo que en la casa no hay número suficiente para dar quórum, y si es así, creo que tendríamos que pasar a cuarto intermedio o seguir otro procedimiento que resuelva la Cámara.

Sr. de la Rúa. — Se puede seguir el debate.

Sr. Sánchez. — Si a la hora de la votación no hay número, entonces se levanta la sesión. Esto es lo que corresponde reglamentariamente.

Sr. de la Rúa. — Podemos continuar con el debate.

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Señor presidente: después de la enjundiosa exposición del señor senador por la Capital, a la que se sumó la del señor senador por Tucumán, queda muy poco por decir. Pero creo que es obligación de todo ciudadano expresarse sobre este particular.

Se han traído todos los antecedentes existentes en la materia: el derecho comparado y la legislación vigente. Y se está discutiendo un proyecto cuyo articulado previene y castiga la discriminación, ya que, sin lugar a dudas, quien la realiza no hace sino lanzar un escupitajo de desprecio sobre la dignidad humana. Por esta razón quiero dejar perfectamente sentada mi adhesión a este proyecto, que más allá de los errores que pueda tener y que se podrán discutir con el correr del tiempo, puede ser pulido en el futuro.

No iba a hacer uso de la palabra, pero lo hago porque me ha quedado una preocupación por causa de algunas expresiones que se han reiterado y que ya aparecen en la fundamentación de este proyecto, donde se dice que también se ha tomado en cuenta la inquietud expresada por dirigentes de la colectividad judía en fecha reciente.

En cuanto al problema de la colectividad judía, se ha señalado en diversos momentos que esta comunidad desarrolla sus actividades, su labor, en nuestro país. Yo creo que va a quedar flotando en el ambiente que esta ley tiene por objeto prevenir la acción antijudía solamente. Y no puedo aceptarlo como ciudadano de la República, como hijo de esta tierra, de esta patria libre, que ha abierto los brazos a todos los hombres del mundo para cobijarlos en su seno para darles la posibilidad de su desarrollo integral dentro de un marco de respeto y de justicia.

Sr. de la Rúa. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Sánchez. — Sí, señor senador.

Sr. de la Rúa. — Muchas gracias.

Siento mucho interrumpir el hilo de su brillante discurso, pero una cosa es clara. Esto es contra toda forma de odio y de persecución racial o religiosa. Comprende también, por supuesto, los atentados que se han realizado contra iglesias o instituciones católicas, y que han sido condenados además por todos los sectores. La inquietud del señor senador se ha tenido en cuenta, y por eso no es una ley para un solo sector sino para toda la sociedad.

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Decía, señor presidente, que mi inquietud reside en que quede flotando que esta ley, por todos los antecedentes que se han esgrimido y que son totalmente válidos, tiene como destinataria a una sola comunidad, en este caso la judía. Y dije que no puedo aceptarlo por mi condición de ciudadano argentino, porque considero que la mía es una patria libre desde sus orígenes, donde jamás se puso de manifiesto la aversión a tal o cual raza o a tal o cual religión. En esta sociedad nuestra existen grupos minoritarios que vamos a poder erradicar con una ley que pueda neutralizar los efectos de esas posturas demenciales.

Aquí tenemos el antecedente de nuestro propio origen, como dije. Nos desprendimos de la Madre Patria en 1810; y a tres años de haber comenzado a caminar por la ruta de nuestro destino en busca de nuestra libertad efectiva, de nuestro desarrollo armónico, de nuestra integración como Nación, en 1813, señores senadores, se dicta un decreto por el que queda abolida la esclavitud y se establece la quema de los instrumentos de tortura, y quedan abolidos los títulos de nobleza.

Allí reside el espíritu de la Nación Argentina, su espíritu de libertad, de respeto por el ser humano, porque otros países que se jactan de ser democráticos, tardaron cincuenta años más, desangrándose en una guerra civil, para poder dar la libertad a los esclavos.

Aquí se han puesto bombas a las sinagogas, a las escuelas judías, a las mezquitas y a los centros católicos; pero no podemos tomar esa irracionalidad para que sirva como testigo de que en la República Argentina existe la discriminación. Estoy totalmente de acuerdo y voy a votar, por un imperativo de conciencia, por un mandato de mi corazón y por sensibilidad humana, por la aprobación de este proyecto porque, como dije, queremos prevenir la acción de alienados y de aquellos que no entienden que todos los hombres son iguales y que las diferencias existen de acuerdo con las naturales condiciones que Dios impuso a cada uno.

He manifestado esta preocupación porque no quiero que mi país aparezca en el concierto mundial como una Nación en donde se persigue por razones de raza, de religión o de ideas. Al respecto, yo pregunto si la colectividad árabe encuentra algún impedimento para desarrollar sus actividades, o las colectividades judía, británica, francesa, alemana o la que fuera, si tienen vallas

para desarrollar sus actividades culturales, deportivas, etcétera.

Entonces, he querido hacer uso de la palabra para manifestar, sinceramente, mi inquietud, ya que aquí sólo se ha hecho alusión a la colectividad judía. Nosotros, en nuestra grandeza de Nación, hemos establecido que es ciudadano argentino el que nace en esta tierra, para que ese sentimiento que nace de las entrañas mismas de este suelo, con todos sus valores, vaya formando la personalidad del ciudadano sin tener en cuenta de dónde proviene o de qué raza son sus padres o abuelos.

No se trata de un exceso de sensibilidad, Honorable Senado. Es simplemente la defensa y la remarcación del perfil, del sentimiento que tiene la Argentina. Nadie puede discutir que recién al caminar por el mundo comprendemos la tremenda significación que para nosotros revisten la libertad y la democracia. Y esa libertad, esa democracia que pretendemos ejecutar plenamente, sólo serán posibles en la medida del respeto por los demás por parte de los hombres que componen el espectro social de nuestra geografía; esta inmensa geografía que, en el Norte, en el Sur, en el Este y en el Oeste, albergó a distintos colonos que se establecieron sin que se les exigiera nada más que el trabajo honrado para seguir consolidando e incrementando el poder de la República.

Es necesario recordar siempre, cuando hablamos de nuestra Constitución, que tiene más de cien años, que allí ya se establece que esta tierra es para todos los hombres de buena voluntad.

Por eso, señor presidente, quiero que quede en claro que me adhiero incondicionalmente a este proyecto de ley, pero también quiero que quede en claro que no estamos protegiendo en especial a ninguna comunidad, sino a todos los hombres que viven, nacen y mueren en nuestro territorio.

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: indudablemente, como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, he firmado el despacho totalmente compenetrado y solidario con todos los fundamentos que motivaron las razones por las cuales el doctor Fernando de la Rúa, senador por la Capital, presentó el proyecto.

Nuestro país tiene una filosofía nacional. Hemos tratado, a través de nuestro surgimiento político como Nación libre e independiente, de ir plasmando por medio de actos jurídicos la filosofía, la idea y el pensamiento de nuestro pueblo, cuando empezamos a ejercer la soberanía

en nuestro territorio y nos constituimos como Nación. Y esa filosofía que tenemos como pueblo la fuimos trasladando al cuerpo normativo cuando constituimos jurídica y políticamente la Nación para convertirla en Estado. Por eso dijimos "para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino" en nuestro Preámbulo, que condensa las razones y motivaciones espirituales, políticas y sociológicas de la constitución orgánica de nuestro Estado.

Y llegaron a nuestro país todos los discriminados, todos los perseguidos. Nosotros somos nietos o bisnietos de esos discriminados que por razones políticas, sociales y económicas —porque también la miseria discrimina— vinieron aquí. Y llegaron para encontrar solamente una cosa: para ser iguales, algo tan sencillo y extraordinario. Nuestro país simplemente les brindó la igualdad ante la ley y el trato fraterno e igual de los hombres a los hombres, en el tránsito permanente de la vida ciudadana. No les ofreció seguros de salud, médicos, electricidad, caminos, agua, créditos. No; simplemente les brindó un cielo y una tierra, el trato fraterno, la igualdad, el respeto, la valorización como seres humanos. Se los daba una Nación que surgía a la vida independiente; no se los brindaban los grandes Estados europeos ni las grandes potencias centrales cargadas de historia, los que habían tenido sobre sus espaldas la responsabilidad histórica del Renacimiento, la Reforma, la Contrarreforma, el Enciclopedismo. Esos países no les podían ofrecer esto que sí encontraban en las Provincias Unidas del Río de La Plata.

Y llegaron colectividades, de las cuales cada uno de los que estamos aquí descendemos. Trajeron su religión, sus costumbres, sus miedos. Por eso, aquí hubo libertad de culto, y junto a ella, libertad religiosa, porque la libertad de culto es la manifestación externa de la libertad religiosa, que es la libertad de adherir al Dios que cada uno tiene a través de su fe, en su conciencia y en su corazón.

Pero también los agnósticos, a través de la libertad de profesar libremente todas las ideas y de publicarlas sin censura previa, tienen esa garantía.

Mi provincia es un jardín de colectividades extranjeras, donde hay pueblos que cuentan con cuatro, cinco, diez o veinte iglesias distintas, de cultos distintos, que conviven y viven esa filosofía de nuestros mayores. No hay problemas étnicos, religiosos ni políticos, de acuerdo con esa filosofía nacional.

Por eso nosotros podemos leer y hablar —y lo hemos consagrado en la literatura nacional— de aquellos "gauchos judíos" que fueron y son

hombres de mi provincia llevados a la literatura por Gerchunoff y por hombres de la cinematografía a la pantalla. Fueron judíos que araron la tierra, aprendieron a ser ganaderos y agricultores, a tomar mate; todavía existen y viven de esa manera. Es mentira que se hayan perdido. Tienen sus nietos, abogados, profesores o comerciantes, muchos de los cuales están acá, en Buenos Aires, pero los abuelos están allá, todavía rindiendo el culto sagrado del agradecimiento a esta tierra en su sinagoga.

Están también los árabes, que nosotros llamábamos "turcos", porque venían con el pasaporte del Imperio Otomano, que los tenían subyugados. Ellos también han convivido libremente, afectuosamente y preocupándose por el quehacer político, social y económico, formando cooperativas, viviendo el comercio, la industria y la cooperativa escolar. Eso es lo que parió la filosofía de nuestro país.

Pero la Argentina está inserta en el mundo. Vive en todo este mundo de interrelación y de comunicaciones ideológicas, filosóficas.

Y ocurrieron cosas en el mundo. Nadie puede ignorar que hubo un genocidio armenio. Nadie puede ignorar que el conflicto bélico de la última guerra mundial tiene el sello del genocidio y de la persecución antisemita. Nadie puede ignorar que se barajaron las políticas imperialistas basadas en el dinero y en la filosofía del dios-Estado. Nadie puede ignorar que hubo sacerdotes alemanes y judíos alemanes en los campos de concentración y que con un Dios igual pero con distintos testamentos bíblicos, unos con el viejo solo y otros con el viejo y el nuevo, se hermanaron para luchar contra la dictadura nazi.

Pero esos estados patológicos de la sociedad, que tantas muertes y desgracias trajeron al mundo, se desparrramaron en él. Nosotros no podemos ignorar que en la Argentina ha habido alienados sociales o políticos que a veces han tenido en la sociedad el poder de las armas o la influencia, del poder para manchar y violar esa filosofía histórica de la Nación. En el país ha habido persecuciones locas contra los judíos y otros sectores, las que han muerto en el repudio de toda una sociedad.

Nadie ignora que el senador que habla profesa una religión determinada, que es la Católica Apostólica Romana. Tampoco se puede ignorar que a través de una interpretación torcida de la ley nuestra Nación se llenó de presos que profesaban la religión de Testigos de Jehová.

Por eso firmamos las convenciones internacionales. A nosotros no nos asustó ni nos enloqueció la Declaración de los Derechos Humanos.

de las Naciones Unidas ni el Pacto de San José de Costa Rica, porque ya teníamos esa filosofía. Los firmamos para ir incorporando al derecho positivo esa filosofía y ese estilo de vida que nosotros hemos plasmado en normas constitucionales cuando hicimos este Estado democrático y libre.

Cuando se habla de que también hubo preocupación por ciertos y determinados ataques a la colectividad judía, no estamos diciendo que a los judíos el Estado argentino, la sociedad argentina, la filosofía argentina, nuestra historia o nuestro espíritu los está persiguiendo o que ha habido discriminación; estamos señalando un hecho patológico, que tuvo un ejemplo mundial, el cual contó con alumnos que, como misioneros del terror y del odio, se desparrramaron por el mundo y acá también anduvieron caminando. A ellos —misioneros del terror— les decimos: no. En nombre de esa filosofía, en nombre de nuestros abuelos, en virtud de lo que señaló el senador Sánchez y de lo que nosotros pensamos decimos: no. Si algunos quieren una discriminación hacia los judíos porque el otro día pasó tal cosa, del mismo modo que podrían querer una discriminación hacia los Testigos de Jehová por bien han pasado algunas cosas; si quieren una discriminación hacia los testigos de Jehová porque también acontecieron ciertas cosas, pues están equivocados.

La colectividad judía en la Argentina es una de las más grandes que esa religión y raza tienen en el mundo. El fundamento del proyecto no es decir que en el Estado y en la sociedad argentinos se la está discriminando; se sanciona esta ley para decir "aquí se termina" a ciertos grupos que, como se señala en los fundamentos, pueden tener actitudes patológicas frente a la queja de gente que se acuerda del Gueto de Varsovia y de muchos otros hechos desgraciados, porque fue perseguida.

Después de la compra de tierras que en la República Argentina hiciera el barón Hirsch —creo que en La Pampa, y ciertamente en Entre Ríos—, luego de la creación de la Jewish Colonization, llegaron todos esos judíos de Rusia, de Rumania y de Hungría, los *ashkenazis*, y también los judíos españoles, o sea los sefardíes, cargados todos ellos de miedo porque venían perseguidos. Y el miedo, como los bacilos y los virus, se trasmite de generación en generación.

Por eso en México se ven aún judíos llenos de miedo, porque son los que llegaron después de la última guerra; en la Argentina, en cambio, vemos judíos sonrientes porque son los nietos o bisnietos de aquellos perseguidos, que llegaron para arar la tierra.

Por eso acá no ha habido una insinuación sino simplemente, como se ha señalado, frente a un hecho patológico, la ratificación de una filosofía, una vocación histórica de vivir, de la cual hacemos profesión de fe doctrinaria, defendiéndola todos. Ese ha sido el alcance de los fundamentos.

Estimo que este proyecto de ley ha de plasmar esa vieja filosofía nacional de que gobernar es poblar y que el país abre las puertas a todos los discriminados del mundo, para que en la República Argentina se hagan iguales.

Estos son para mí los fundamentos más sagrados e importantes que avalan este proyecto de ley que con seguridad vamos a sancionar por unanimidad, con lo que dejo explicado el sentido de mi voto. (*Muy bien!*)

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: voy a ser muy breve.

Simplemente, deseo dejar sentada nuestra posición, la que desde luego fue anticipada con la firma que, como integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, coloqué en el dictamen sobre el proyecto originario del señor senador de la Rúa.

En realidad, con todo acierto ese proyecto establece la normatividad que responde a valores fundamentales consagrados en la letra y el espíritu de la Constitución Nacional. Constitución que, como bien hoy se ha recordado, forma parte ideológicamente de ese honroso movimiento que se conoció con el nombre de constitucionalismo y que tiene como meta fundamental y síntesis instintiva de su ideología, el resguardo y la protección de la libertad y la dignidad humanas, para no solamente proteger al individuo contra los abusos de los detentadores del poder sino también, como en este caso, protegerlo contra sectores retrógrados que alguna vez, con su accionar, han pretendido —o puedan pretender— poner en vilo la finalidad personalista que subyace en la filosofía de nuestra Ley Fundamental.

Frente a la intención de grupos de signo totalitario, debemos preservar aquellos valores fundamentales, aquella condición de la dignidad humana, evitando que puedan malversarse por aquellos inspirados en un intento de discriminación y en motivos que hacen a la raza, a la religión o a la baja política, y que no se compadezcan con esos fines superiores que inspiraron a nuestra sabia y liberal Constitución.

Aquí está el fondo del problema. Lo han puesto de manifiesto todos y cada uno de los

oradores, algunos en forma explícita, tal como lo acaba de hacer el señor senador Brasesco, otros yendo realmente al espíritu que informa nuestra Constitución.

Hay una frase clásica del general Bartolomé Mitre, pronunciada en la Convención reformadora de la Constitución de Buenos Aires que, con el permiso de la Honorable Cámara, me voy a permitir leer. Mitre señalaba que "...todo aquel que examine nuestra historia, con ánimo sereno y espíritu filosófico, hallará siempre un hilo conductor que nunca se pierde, y que muestra que el pueblo argentino en medio de sus grandes evoluciones, ha sabido siempre por dónde caminaba...".

¿Y cuál era ese camino que desde los albores de nuestra organización constitucional transitó nuestro pueblo? Precisamente, inspirándose en esa filosofía liberal de la Constitución que aquí se ha recordado, los constructores del país encontraron el gran camino y dieron además un ejemplo de ese consenso que todos buscamos en pos de amplios objetivos, consenso que fue posible en ese entonces porque todos y cada uno de los actores estaban consustanciados con ideas-fuerza que hicieron la felicidad de nuestro país.

Unos y otros, pero especialmente los más lúcidos, buceando a través de la generación de 1837 sobre los males del país, hicieron algo así como una vivisección de nuestra sociedad, una especie de escrutinio sobre aquello que podía constituir el gran problema. ¿Cuál era esa gran dificultad que vieron los inspiradores y realizadores de nuestra Constitución y leyes fundamentales? Ese problema era el desierto.

El senador Brasesco acaba de citar la clásica frase "gobernar es poblar". ¿Cómo acertaron esos hombres en la gran solución de ese problema para vencer al desierto que nos agobiaba? La respuesta fue: poblándolo con todos los hombres que vinieran a ampararse en nuestra leyes. Sucede que no podíamos llenarlo con el simple crecimiento vegetativo propio porque el problema era magno y todavía hoy lo estamos afrontando. Había que llamar a hombres de todos los lugares del mundo para que vinieran confiados y tranquilos y se sintieran mejor que en sus propias tierras, donde en aquellos tiempos vivían en medio de persecuciones y zozobras.

Así vinieron al amparo de nuestras instituciones liberales hombres de todo el mundo, quienes se sintieron seguros y confiados y a quienes se les brindó el marco de esas instituciones liberales que, como lo decía el señor senador de la Rúa al citar nuestra Constitución Nacional,

consagraban la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; en suma, las condiciones de un mundo libre y ajeno al temor.

Bien, señor presidente. Creo que este proyecto que vamos a votar, recogiendo expresiones del señor senador Sánchez, es más que nada un acto de afirmación, sin duda innecesaria desde el punto de vista político pero siempre conveniente.

Las normas que habremos de votar mejoran el espectro jurídico de nuestro país; lo hacen desde el punto de vista instrumental. Acentúan algo que está subyacente en la normalidad institucional y que, sin embargo, no está de más resaltar.

Estas normas son buenas no sólo por lo que valen en sí mismas en cuanto a su letra, sino porque también traerán confianza pues detrás de ellas está subyacente el aspecto fáctico. Hay un pensador que suele citarse en las cátedras de Derecho Constitucional, Hermann Heller, quien sostiene que la Constitución no es solamente una norma aislada sino que debe tener su respaldo en la normalidad de la sociedad a la cual se aplica. Hay Constituciones que son sólo normas escritas y no tienen vigencia fáctica; en cambio, hay otras que sin estar escritas rigen de igual modo porque se encuentran incrustadas en la conciencia de los pueblos a los cuales se aplican.

Las normas que nosotros vamos a votar valen como tales pero también tienen un valor especial pues siguen el camino del que hablaba Mitre, ese camino que inició la República Argentina en los albores de su nacionalidad y que se cristalizó en la Constitución de 1853, incorporado también al espíritu de nuestro pueblo.

Como bien se recordó, estas normas habrán de servir no solamente a los miembros de la colectividad judía, que han enriquecido nuestro país con altos exponentes de la cultura, el trabajo y

el empresariado, sino también a las otras colectividades que habitan nuestro suelo. Para todos ellos vamos a votar este proyecto de ley, de modo que sepan que en la Argentina seguimos con el mismo espíritu de aquellos que firmaron la Constitución de 1853, con el sentido liberal que hace justicia y que estará resguardado por el convencimiento general de la justicia que estas normas encarnan y por el respaldo, sin duda cierto, de toda nuestra comunidad.

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sra. Rivas. — Solicito que se llame para votar.

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — Así se hará, señora senadora.

—Se llama para votar.

Sr. de la Rúa. — Solicito que por Secretaría se informe qué número de señores senadores hay en la casa.

Sr. Secretario (Macris). — En este momento hay veintidós señores senadores.

Sr. de la Rúa. — No son suficientes para formar quórum. Entonces, el tema quedaría diferido para la próxima sesión.

Pido que se pase lista.

Sr. Berhongaray. — Hago moción de cierre del debate.

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — La Presidencia ha dado por cerrado el debate y está llamando para votar.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). — Como no hay número suficiente de señores senadores en la casa para formar quórum, queda levantada la sesión.

—Son las 23 y 17.

APOLFO H. MADANA,
Subdirector a/c. del Cuerpo de Taquígrafos.

APENDICE

SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

1

Investigación de los derechos humanos en Cuba

—El texto de la comunicación aprobada es el siguiente:

El Senado de la Nación,

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, informara ampliamente a esta Honorable Cámara sobre la posición de la Cancillería Argentina respecto del problema de los derechos humanos en Cuba.

2

Cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Corrientes

—El texto de la resolución aprobada es el que figura en la página 2829.

3

Beneficios a derechohabientes de desaparecidos

—El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la página 2829.